

García Antón insiste en los aportes del Ebro

Etelvina Andreu pide a los regantes que dejen la «cabezonería» y el «fanatismo político» y reitera su disposición a llegar a acuerdos

A. G. A.

A Icaldes y portavoces socialistas del Vinalopó exigieron ayer al Gobierno que finalice «cuanto antes» la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó, a la vez que recordaron al Consell su «obligación de realizar las obras postrasvase» para distribuir los caudales. Las dos demandas fueron las principales conclusiones de la reunión mantenida en Elda por una treintena de representantes municipales para analizar la decisión de la Comisión Europea de financiar el proyecto con 120 millones de euros. El alcalde de Elche y presidente del PSPV, Diego Macià, destacó que la ayuda europea es «fundamental para el futuro de la comarcas del Vinalopó», al tiempo que defendió la gestión del Gobierno en este asunto porque «está cumpliendo su compromiso con la desalación y modernización de regadíos», además de con el trasvase. A su juicio, esta decisión prueba que el «boicot» del PP hacia el proyecto «ha fracasado». Por ello, instó al presidente autonómico, Francisco Camps, a «dejar de manipular y utilizar el agua como estrategia electoralista».

Asimismo, la primera edil de Villena, Vicenta Tortosa, auguró que con el trasvase «se podrá hablar de la recuperación de los acuíferos del Vinalopó», y aseguró que el trazado desde Cullera «es la única manera de que se cumplan los requisitos que la UE había marcado» para dotar los fondos. También el alcalde de Aspe, Roberto Iglesias, hizo hincapié en que «sería lamentable» que la conducción estuviera terminada y «no pudiera llegar a los regantes porque la Generalitat no hace sus deberes». Por otro lado, desde Alicante, la subdelegada del Gobierno, Etelvina Andreu, pidió a los representantes de los regantes que abandonen la «cabezonería» y el «fanatismo político», ya que la aportación hídrica «va a llegar y su uso está garantizado». A su juicio, para la Junta Central de Usuarios «será difícil explicar» a los agricultores que son ésas las razones por las que «no se quiere el agua», por lo que reiteró su disposición a reunirse con esta entidad para «intentar que todos vayamos de la mano». De igual forma se expresó la diputada socialista Juana Serna, quien resaltó que el Júcar-Vinalopó «resuelve» la falta de recursos en estas comarcas. Además, aseveró que Alicante «podrá fabricar más agua» con la desalación que con el trasvase del Ebro.




Por último, el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, señaló que «gracias al Programa Agua» la Vega Baja «no ha sufrido restricciones» este verano. Pla incidió en que la desaladora de Torreveja «el agua está garantizada».

El conseller de Infraestructuras y Transportes, José Ramón García Antón, volvió a reivindicar ayer en Calpe el trasvase del Ebro e insistió en las consecuencias de su derogación sobre los agricultores, dado que, señaló, el 80 por ciento del agua se gasta en el regadío. El otro 20 por ciento es el que se utiliza para el abastecimiento, por lo que, según dijo, en la Marina Alta «no es el urbanismo el principal problema



Etelvina Andreu, entre los diputados Juana Serna y Agustín Jiménez, ayer

Servicios

-  [Enviar esta página](#)
-  [Imprimir esta página](#)
-  [Atención al lector](#)

[Anterior](#) [Volver](#) [Siguiente](#)

Noticias relacionadas

■ [La política hídrica concentra la mitad de las inversiones](#)

para la escasez de agua, porque éste recurso se puede pagar».

García Antón apostó por modernizar las infraestructuras hídricas para ahorrar la mayor cantidad de agua posible. Así, destacó que es importante depurar el agua con diferentes tratamientos para poder reutilizarla. «Estamos haciendo los deberes pero no tenemos la garantía total que nos hubiese ofrecido el trasvase del Ebro», indicó. De esta forma, culpó tanto al Gobierno como a Cataluña y Aragón del rechazo de esta alternativa. Aseguró que esta última se opuso al proyecto «porque tenía miedo de que la Comunidad se desarrollase más rápido». Con esto, remachó en su ponencia, «mientras se desbordan los ríos nosotros no tenemos agua», consecuencia de una política hídrica «nefasta, insolidaria e insostenible». En este mismo sentido, el portavoz del PP en el Senado, Pío García-Escudero, rechazó que los estatutos de autonomía regulen cuestiones como el agua, dado que por su ámbito nacional «la debería dirigir el Gobierno».